

La otra España

Santos Juliá 18/02/1996

La profunda consternación que un pistolero de 25 años ha provocado al asesinar a un profesor de 63 obedece al simple cotejo de las cualidades que adornaban al asesinado con las que se le suponen al asesino, pero procede, sobre todo, de que la imagen de un hombre mayor, abatido por los disparos de un hombre joven, nos arroja a la cara lo peor de nuestra propia historia. Otra vez la intolerancia, lo que los jóvenes de camisa azul de los años treinta llamaban la dialéctica de las pistolas, imponiéndose brutalmente sobre el liberalismo, sobre el gusto por la discusión y la palabra como arma suprema de la política de la que hicieron gala los demócratas de aquellos años; otra vez el enemigo de la inteligencia, y amante de la muerte, liquidando al intelectual dedicado a construir un Estado de derecho.

Si hubiera que elegir del magisterio del profesor Tomás y Valiente un recuerdo, ocuparía lugar destacado su pasión al afirmar que "aquí ha habido siempre de todo", que tenemos una historia plural, que somos herederos de una rica y diversa tradición. En lugar del inconsolable dolor por la España que no fue, Tomás y Valiente llamaba con énfasis la atención sobre la temprana aparición y la persistencia de una corriente política e ideológica radicalmente liberal que irrumpe en la Constitución de Cádiz de 1812, reaparece con la Gloriosa Revolución de 1868 y resurge de nuevo en la República de 1931. No se les escapaba, desde luego, que un rasgo común a todas esas Constituciones había sido lo efímero de su vigencia: ni Cádiz, ni la democracia del 69, ni la República duraron más allá de cinco años, pues sobre esa gran tradición liberal sé acabará por imponer la otra tradición estudiada por Francisco Tomás, la antidemocrática, la intolerante, la que llegó a identificarse con la única y eterna España al convertir su ser en esencia metafísica y teologal.

Pero la Constitución de 1978, al desacralizar España y reconocer la pluralidad de tradiciones y naciones que constituyen el Estado

español, recuperaba, según Tomás y Valiente, lo más valioso de la tradición liberal y cerraba, con la construcción de un Estado sin parangón posible en Europa, los largos períodos de la España esencial, católica, antidemocrática. Era como si el río nacido en Cádiz, a través de los filtros suministrados por un tiempo no siempre propicio, se hubiera finalmente remansado en una Constitución que servía de marco para la solución pacífica de los conflictos políticos.

Matando a un profesor que enseñaba estas cosas, ETA y sus secuaces creen expresar el ancestral odio a España que anidaría en lo más profundo de Euskadi. No caen en la cuenta, sin embargo, de hasta qué punto reproducen lo más negro de la tradición de esa otra España enterrada en 1978: la nación sagrada, la pistola exaltada como arma de la política, los gritos de viva la muerte, el exterminio. Algunos buscan en Irlanda, Argelia o Palestina. el manantial del que beben quienes en Euskadi recurren a la bomba o a la pistola. No hay que ir tan lejos: sin caer en historicismos, habría que estar de acuerdo con Bergamín cuando decía que el País Vasco era el único lugar en que quedaban verdaderos españoles, de esos que no tiemblan al empuñar una pistola. Lo tremendo es que cuando un español de verdad empuña una pistola lo suele hacer para disparar sobre un liberal desarmado.

Mal que les pese a los nacionalistas vascos, el enemigo histórico contra el que sus jóvenes radicales han dirigido con ejemplar constancia las pistolas, desde que encontraron pueblo que los jaleara e Iglesia que los bendijera, fue en el siglo XIX el liberalismo, hoy es la democracia. Que esa tradición resurja en un joven de 20 años asesinando a un señor de 60, exactamente igual que en la noche de los tiempos los pistoleros irrumpían en los despachos y descerrajaban un tiro a sus víctimas indefensas, es lo que "nos mata un poco a cada uno de nosotros" porque a todos nos hunde en la miseria de nuestra peor historia.

Entre vascos

Santos Juliá, El País, 26/05/1996

Como los diputados que se necesitaban para formar Gobierno eran los de CiU, el pacto conseguido entre el PP y el PNV ha corrido el riesgo de entenderse como poco más que un intento de última hora para que nadie quedara descolgado. Sin embargo, y por lo mismo que no era estrictamente necesario, los protagonistas de los hechos tienen toda la razón cuando califican de histórico el resultado de sus negociaciones. Y no porque se haya reconstituido, o constituido, un gran pacto entre todas las fuerzas de centro-derecha presentes en el sistema político, sino porque el PNV, que era en su origen más de derechas y más católico que la católica derecha española, y el PP, que hunde sus raíces en la derecha españolista y centralista, han contribuido a restañar con esta acción una de las grandes heridas abiertas entre los vascos durante la guerra civil.

Arzalluz tiene razón: "El PNV es un partido antiguo, democrático y en algunas ocasiones pisoteado por la derecha española". Pero olvida un detalle: entre la derecha que pisoteó al PNV contaba, y de qué manera, el voluntariado vasco y navarro que acudió, movido como por un resorte, en auxilio de la rebelión militar. Fue entre navarros y vascos donde los generales rebeldes encontraron su más significativo apoyo popular, debido precisamente al acendrado catolicismo que impregnaba su ideología política. Se dio así la paradoja de que mientras unos vascos católicos formaban las primeras milicias nacionalistas españolas, otros vascos no menos católicos se sentaban con republicanos, socialistas y comunistas en el Gobierno de la República. El cardenal Gomá reprochaba a José Antonio Aguirre su participación en semejante "contubernio", mientras Franco denunciaba ante los diplomáticos del Vaticano, que se negaban a excomulgar a los nacionalistas vascos por comer en el mismo plato que los comunistas, la "monstruosa alianza" de aquellos católicos con los enemigos de la religión.

Recordar todo esto ahora no tiene otra intención que destacar la relevancia histórica del pacto negociado entre vascos por el que el PP, que viene de la derecha española, ha podido encontrarse con el PNV, que viene de la derecha vasca. Pero ver en el pacto el nacimiento de una coalición burguesa de centro-derecha ante la que se podría alinear, esta vez sin complejos, toda la izquierda, desde el PSOE a IU, constituiría un notable error de perspectiva. Lo que el PNV, y en otra medida CiU, aporta con su participación en el pacto es una prueba más, y ahora definitiva, de que su posición en el continuo izquierda-derecha es absolutamente secundaria respecto a su identidad como partido nacionalista. Lo demostró en 1936, coligándose con los partidos del Frente Popular que gestionaron para Euskadi la concesión de su primer Estatuto de Autonomía, y lo confirma ahora no rehusando el pacto con una derecha que se compromete por escrito a un "pleno y leal desarrollo del Estatuto de Gernika".

Tal vez nuestros deseos vayan en estos momentos muy por delante de lo que la realidad da de sí, pero, puestos a soñar, nada impide imaginar una situación en la que un vasco a cargo del Ministerio del Interior, o sea, jefe de la Policía y de la Guardia Civil españolas, consiga en colaboración con un vasco a cargo de la Consejería de Interior de Euskadi, y jefe, por tanto, de la Policía vasca, dejar a ETA sin terreno de maniobra. Es una nueva situación, que pone de relieve algo que de todas maneras ya sabíamos: que si alguna vez ETA desaparece será porque la sociedad vasca ha encontrado el camino para cerrar todas las fracturas abiertas desde la hecatombe de 1936.

El acuerdo entre el PP y el PNV es una buena noticia porque puede entenderse, según decía Jaime Mayor Oreja, como superación del "fatalismo que condenaba al desencuentro" a amplios sectores de la sociedad vasca.

Silenciar una voz

Santos Juliá, El País, 22/09/1996

En una circular dirigida a los afiliados de su partido, el Bizkai Buru Batzar- [ejecutiva del PNV de Vizcaya] admite que no le corresponde señalar a los ciudadanos qué periódico han de leer, pero reivindica como la cosa más natural del mundo recomendarles qué periódico no han de comprar y en qué periódico no han de insertar publicidad. De momento, el BBB no pretende imponer a su "querido/a alderdikide" [miembro del partido] la lectura obligada de un periódico, menos mal; pero, como un periódico es un objeto que identifica ante sus vecinos a quien lo adquiere, todo militante vizcaíno del PNV sabe ya que, si alguien lo ve comprando ese periódico o insertando en él publicidad, quedará retratado ante la comunidad de patriotas como un mal alderdikide, como un alderdikide que no cumple los deseos del Bizkai Buru Batzar.

Un deseo construido sobre una lógica que reproduce en su estructura interna los mismos argumentos utilizados por el mundo de ETA para atacar a los nacionalistas del PNV. Ante todo, la identificación del otro, por más vasco que sea, con la "derecha política española": hoy ya se sabe que para algunos vascos más perro español que un perro español es un policía vasco. Además, y como es obligado en todo nacionalista, la presentación de sí mismo, como víctima de una "agresión": el periódico de lectura prohibida somete a "amedrentamiento y maltrato intencionado a "nuestras gentes", que deben de ser algo masoquistas, dicho sea de paso, porque la razón para silenciar al periódico es su "amplia venta, especialmente en el territorio de Bizkaia".

No impide esa venta masiva que el PNV se considere ante una agresión política, a la que es preciso responder de forma contundente y con un tipo de discurso que pertenece también al mismo orden del emitido por HB y ETA: se trata de organizar la "defensa activa" contra quien no comparte "nuestro proyecto

nacionalista vasco". No, desde luego, con idéntica práctica, lanzando un asalto a su sede o arrojando cócteles molotov contra sus instalaciones. Pero sí con "una decisión y una acción política del partido", que consiste, en primer lugar, en identificar al supuesto agresor como parte del capitalismo español para, en segundo lugar, ahogarle económicamente, suprimiendo sus fuentes de financiación y bloqueando sus canales de distribución. Al final, si esta "respuesta política" tiene éxito, se habrá silenciado la voz de un agresor capitalista español.

Si en cualquier otro lugar de la Monarquía y de la Nación Española, a las que se refiere con tan amplio uso de mayúsculas el BBB del PNV, se hubiera producido una amenaza semejante al pluralismo y a la libertad de prensa, las voces de protesta habrían llegado al cielo. No hay más que imaginar la que se habría armado si, en la vorágine de la pasada legislatura, la comisión ejecutiva del PSOE hubiera enviado a sus afiliados un escrito semejante. Ahora, el órgano dirigente de un partido que ostenta, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto, la Presidencia, del Gobierno de Euskadi, impone a sus militantes como compromiso político el boicoteo de un periódico, y no pasa nada.

Y, sin embargo, la resolución del BBB es de una gravedad extraordinaria, no ya porque vuelve a atizar el fantasma del victimismo y porque provoca una nueva fractura social en Euskadi, sino porque demuestra la dificultad de cohonestar nacionalismo y democracia. George Steiner consideraba el nacionalismo como el veneno de nuestro tiempo porque no podía identificar ningún designio totalitario que no se alimentara de él. Años y muertos ha costado, pero, al final, cuando les ha tocado a algunos de los suyos, los nacionalistas vascos moderados no han dudado en calificar a otros nacionalistas igualmente vascos como fascistas y totalitarios. El BBB debería preguntarse si en esta carta no reproduce la misma lógica que lleva a esos otros nacionalistas a la agresión física: la lógica que impulsa a silenciar la voz del otro por la simple razón de que no es la mía.

Chantaje permanente

Santos Juliá, El País, 20/10/1996

"Los nacionalistas no se baten por la causa de la República ni por la causa de España, a la que aborrecen, sino por su autonomía y semi-independencia", escribía Azaña en vísperas de la caída de Bilbao. No sabía bien hasta que punto era así. Desde meses antes del fin de la guerra en Euskadi, varios emisarios oficiales y officiosos del gobierno autónomo y del PNV, solos o en compañía de personalidades vinculadas al gobierno de Cataluña, exploraron a las autoridades británicas para proponerle diversos planes de paz separada con el argumento de que ellos nada tenían que ver con uno u otro de los combatientes. En alguna ocasión, esos planes vasco-catalanes imaginaban que una especie de constitución al estilo de Suiza en la que "Cataluña y las Provincias vascas se extenderían hasta encontrarse sobre el cadáver de Navarra para formar una barrera democrática y francófila al sur de los Pirineos". Azaña, que conocía o sospechaba todos esos planes, temía que "caído Bilbao, los nacionalistas arrojen las armas, cuando no se pasen al enemigo".

Para los nacionalistas vascos, la constitución democrática del Estado español es, de antiguo y hasta en las más dramáticas circunstancias, un valor estrictamente instrumental. Vale sólo en la medida en que sirva para alcanzar el fin último de su ideario, que es la soberanía del pueblo vasco, de la que la autonomía se concibe, también de antiguo, como un primer paso. De ahí procede la política algo esquizofrénica de aceptar el Estatuto y luchar y gobernar en su nombre, rechazando, cada vez que la ocasión se presenta, la Constitución... que hace posible el Estatuto. Pero de ahí procede también, y esto es más grave, el chantaje que consiste en colocar al Estado ante el permanente dilema de demostrar su legitimidad. Para los nacionalistas vascos -ha recordado el presidente Ardanza esta misma semana- el Estado español sufre un déficit de legitimidad en Euskadi porque una parte "muy mayoritaria" de la sociedad vasca no aprobó la Constitución.

¿Qué habría que hacer, hasta dónde habría que llegar para que un Estado español con una Constitución democrática disfrutara de legitimidad a los ojos del PNV? Por lo que se ve, el amplio nivel de autonomía que el Estatuto concede a los ciudadanos vascos del Estado español, a considerable distancia de lo que ocurre en territorio francés, no es suficiente. Tampoco bastará una ampliación del nivel de autogobierno, pues de lo que se trata no es de una prosaica cuestión de competencias sino de que, a falta de reconocer su soberanía, el gobierno del Estado adopte como política la que se acuerde "entre nosotros", o sea, entre los nacionalistas vascos. Según Ardanza, el Estado español sólo gozará de legitimidad en Euskadi si cumple las resoluciones del Parlamento vasco, incluso cuando versen sobre materias fuera de su competencia y aunque coincidan con el inicio de una ominosa cuenta atrás anunciada por los portavoces políticos de una organización terrorista sin cuyo concurso aquellas resoluciones no habrían obtenido la mayoría.

Un nacionalista como Ardanza puede discrepar del recurso al terror y hasta condenarlo como estrategia errada para alcanzar la soberanía del pueblo vasco. Pero lo que no puede hacer, porque se lo impide su fe nacionalista, es aceptar que el marco de convivencia y libertad de los ciudadanos vascos -nacionalistas o no- sea la Constitución democrática del Estado español. ¿Qué pinta el Estado tratando de alterar lo que entre nosotros hemos decidido? se pregunta el presidente Ardanza, incapaz de plantearse si lo que entre ellos han decidido contribuye a deslegitimar a ese pobre Estado que le permite ser presidente. Eso no le inquieta en absoluto, y como no le inquieta no teme decir en alta voz lo que en el fondo piensa: que si la cuenta atrás acaba en tragedia, el único culpable será el Estado español que en este "tema", como remacha miserablemente Arzalluz, se limita a mirar a otro lado.